

## **PERIODISMO DESDE LAS PERIFERIAS: ZONAS SILENCIADAS Y VACÍOS ÉTICOS, A SEIS AÑOS DE LA VIOLENCIA**

Diego Cazar Baquero

La crisis de violencia en la que se sumió Ecuador, a partir de 2018, durante el régimen del expresidente Lenín Moreno, y que se extendió a lo largo de los períodos de los Gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, evidenció el histórico proceso de degradación de las instituciones democráticas, su progresiva permeabilidad a la infiltración de actores violentos y, como una de sus consecuencias, el acelerado incremento en los niveles de riesgo que enfrenta el periodismo al realizar coberturas relacionadas con el sector de la seguridad, el crimen organizado o la corrupción.

Entre 2018 y 2024, la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) ha llevado a cabo un trabajo de investigación sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en todo el país y ha revelado algunas de las razones por las cuales periodistas, medios y trabajadores de la comunicación enfrentan amenazas que ponen en riesgo su vida y promueven el silenciamiento parcial o total de la prensa en zonas periféricas del territorio nacional.

Entre 2019 y 2023, Ecuador presencié, además, la escalada de una crisis del sistema penitenciario, autoexilios y nuevos crímenes en contra de periodistas, asesinatos, masacres, secuestros y cambiantes prácticas extorsivas.

Este complejo esquema de riesgos configura también escenarios que comprometen gravemente los principios del periodismo ecuatoriano, arrinconan a periodistas, aprovechando sus distintas vulnerabilidades o sus deficientes estructuras éticas, y someten a poblaciones enteras a la desinformación y a la hegemonía de grupos violentos, muchas veces amparados o en connivencia directa con círculos de poder político y económico.

### **2018: SECUESTRO Y ASESINATO DEL EQUIPO PERIODÍSTICO DE *EL COMERCIO***

Entre el 26 de marzo y el 12 de abril de 2018, la sociedad ecuatoriana asistió a un episodio sin precedentes en su historia: un equipo periodístico del diario *El Comercio* —el mayor rotativo capitalino— fue secuestrado por parte del Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderada por Walter Arízala, alias “Guacho”, un joven afrocolombiano que, según fuentes oficiales, murió en manos de fuerzas militares colombianas y ecuatorianas en medio de un operativo que tuvo lugar en diciembre de ese mismo año.

El secuestro de los tres miembros del equipo de prensa ocurrió en la parroquia de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, una de las más empobrecidas del país. El reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra cumplían con una cobertura sostenida que el periódico había iniciado varias semanas antes con varios miembros de su redacción. Perseguían los indicios de que grupos armados irregulares habían reforzado su presencia en la zona. El secuestro, de hecho, era una consecuencia de una sucesión de acontecimientos violentos registrados en esa jurisdicción, en donde la presencia estatal ha sido, históricamente, casi nula. Además,

se trataba de un plagio de carácter político, pues constituía un mensaje directo al Gobierno de Moreno, como respuesta a las decisiones gubernamentales que alteraban las dinámicas ilegales que se registraban en esa zona.

El 27 de enero de ese año estalló un coche bomba en el cuartel policial del cantón esmeraldeño de San Lorenzo, localidad ubicada a 10 minutos de Mataje. No se registraron víctimas mortales, pero 23 personas resultaron heridas, 37 casas sufrieron daños y la edificación policial quedó inservible. El mensaje, según los expertos, era claramente una afrenta a la institucionalidad del gobierno y representaba una advertencia real de que vendrían sucesos aún más graves. Este hecho fue considerado el primer atentado terrorista en la historia de Ecuador.

El 20 de marzo de ese mismo año, tres marinos ecuatorianos murieron durante un patrullaje a consecuencia del estallido de una bomba artesanal que ellos mismos encontraron al borde de la carretera que conduce a Mataje. Fue solo seis días después de que el equipo de *El Comercio* fuera secuestrado, precisamente en Mataje.

Desde entonces, el incremento de los índices de violencia se convirtió en una constante en todo el país, aunque Esmeraldas era el territorio que concentraba, por entonces, la atención nacional.

El 27 de marzo, la Fiscalía de Ecuador abrió un proceso de investigación sobre el secuestro y asesinato de los periodistas, no obstante, seis años después el caso no ha salido de la etapa de indagación previa; es decir, no se han formulado cargos en contra de nadie ni se ha iniciado proceso alguno, a pesar de que el Código Orgánico Integral Penal dispone que la etapa de indagación previa, en casos como este, no puede durar más de dos años. El escenario de impunidad, que desde entonces se instaló frente a este caso, significó también el incremento progresivo de los

índices de riesgo para periodistas de todo el país, sobre todo para aquellos dedicados al cubrimiento de temas relacionados con el sector de seguridad, corrupción o crimen organizado en general.

Las políticas públicas de seguridad del Estado ecuatoriano quedaron en evidencia durante este episodio. Las autoridades gubernamentales evadieron o negaron su responsabilidad de ejercer control en la zona fronteriza y de advertir, a cualquier ciudadano o ciudadana, así como a cualquier equipo de prensa, que aproximarse a la línea de frontera en el poblado de Mataje y en todo el cordón fronterizo, por esos días, implicaba un riesgo mayor que el que se corría apenas dos meses antes. Las acciones estatales bajo el régimen de Lenín Moreno, después de los hechos acaecidos en 2018, en la frontera norte, se resumen en:

una profunda reestructuración del sector seguridad que implicó la eliminación de varias entidades de control y organismos públicos de coordinación con la sociedad y los gobiernos locales. Estos recortes y transformaciones orgánicas se juntaron también a una pérdida de visión estratégica del Estado para hacer frente a nuevas formas de criminalidad compleja, muy diferentes a las vividas por el país en época pasadas. (Pontón y Rivera 2024, 152)

## **PRIMEROS HALLAZGOS SOBRE LAS CONDICIONES DE LA PRENSA**

Entre 2018 y 2019, San Lorenzo experimentó un aumento de la violencia en un 70 % (Primicias 2020). Los investigadores Daniel Pontón y Fredy Rivera aseguran que el año 2019 se constituyó como un

período especial cargado de imágenes violentas, material y simbólicamente hablando, y actos criminales cargados